



AMPARO DIRECTO
D.A. 207/2020.

QUEJOSA:

MAGISTRADA RELATORA:
ADRIANA LETICIA CAMPUZANO
GALLEGOS

SECRETARIA DE TRIBUNAL:
NORMA ANGÉLICA BENAVIDES
VARELA

Ciudad de México. Sentencia del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de **dieciocho de febrero de dos mil veintiuno**.

VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo directo número **D.A. 207/2020**, promovido por *****

por conducto de su representante legal *****

en contra de la sentencia de **veintiocho de febrero de dos mil veinte**, emitida por la Magistrada instructora de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los autos del juicio contencioso administrativo, con número de expediente *****; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el **dieciocho de agosto de dos mil veinte**, en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, *****, *****, *****, en representación de la empresa *****, *****, *****, ** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto y autoridad que precisó de la siguiente manera:

"III. AUTORIDAD RESPONSABLE:

La Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien dictó la sentencia que se reclama, (...).”

"IV. ACTO RECLAMADO:

*La sentencia definitiva dictada el 28 de febrero de 2020, emitida por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del juicio de nulidad *****, en el que resolvió reconoce la validez de la resolución impugnada”*

SEGUNDO. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló como terceros interesados a la Administración de Fiscalización a Grupos de Sociedades “5” de la Administración General de Grandes Contribuyentes, al Jefe del Servicio de Administración Tributaria y al Secretario de Hacienda y Crédito Público; asimismo, narró los antecedentes del asunto que consideró pertinentes.



TERCERO. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Tribunal Colegiado, que por auto de presidencia de **treinta y uno de agosto de dos mil veinte** *-entre otros aspectos-* la **admitió a trámite** con el número de expediente **D.A. 207/2020**, reconoció el carácter de terceros interesados, a la Administración de Fiscalización a Grupos de Sociedades “5” de la Administración General de Grandes Contribuyentes, al Jefe del Servicio de Administración Tributaria y al Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Por otra parte, se destacó que no obstante la quejosa había señalado como autoridad responsable a la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal del conocimiento, dado que el juicio de nulidad de origen se tramitó y resolvió en la vía sumaria, por lo que el acto reclamado fue dictado de forma unitaria y en ese sentido, únicamente asistía el carácter de autoridad responsable a la Magistrada Instructora de la referida Sala, y no el órgano actuando de manera colegiada.

CUARTO. Conviene destacar como hecho relevante que *-en el presente asunto-* ninguna de las partes promovió **amparo en forma adhesiva** al promovido por quien fuera parte actora en el juicio contencioso administrativo.

QUINTO. En auto de **uno de octubre del año próximo pasado**, se tuvo a las autoridades tercero

SEXTO. Por auto de **diecinueve de enero de dos mil veintiuno**, se ordenó **turnar** el asunto a la Ponencia de la Magistrada **Adriana Leticia Campuzano Gallegos**, para la formulación del proyecto de sentencia correspondiente.

Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracciones I y III, del citado Acuerdo General, **la presente sesión se celebra vía videoconferencia**, y sin la presencia del público, la cual generará los mismos efectos y alcances jurídicos que las que se realizan con la presencia física, asimismo, concluida la misma y dentro de un plazo razonable, el registro respectivo se cargará en la Biblioteca Virtual de Sesiones, desde la cual las partes y el público en general podrán consultar su contenido; y,



CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer del juicio de amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 107, fracciones III, inciso a), V, inciso b), y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción II, y 34 de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el contenido del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito; en razón de que el juicio es promovido contra una resolución que puso fin al juicio de nulidad pronunciada por la magistrada instructora de un tribunal administrativo que reside en el territorio en que este órgano judicial ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Legitimación. La acción constitucional fue promovida por parte legítima, ya que la demanda de amparo fue formulada por *****
apoderado de *****, *****
***** -parte actora en el juicio de nulidad- a quien la Magistrada instructora del conocimiento le reconoció dicho carácter mediante proveído seis de diciembre de dos mil diecinueve, visible a fojas sesenta y siete del sumario

TERCERO. Oportunidad. La demanda de amparo se promovió dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que la sentencia reclamada fue **notificada** a la parte quejosa el **diez de marzo de dos mil veinte**, como se advierte de la minuta que contiene la razón actuarial de notificación que obra a fojas mil ciento sesenta y tres del sumario contencioso; por lo que dicha notificación **surtió efectos** al tercer día hábil, esto es, el **trece de marzo siguiente**, en términos de lo previsto en el artículo 65, párrafo IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

NORMA ANGELICA BENAVIDES VARELA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.01.33.d
05/10/23 13:31:07



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

treinta y uno de julio de dos mil veinte, en la siguiente forma:

Número de Acuerdo	Periodo de suspensión
SS/10/2020	Del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte
SS/11/2020	Del veinte de abril al cinco de mayo de dos mil veinte
SS/12/2020	Del seis al veintinueve de mayo de dos mil veinte
SS/13/2020	Del uno al quince de junio de dos mil veinte
SS/14/2020	Del dieciséis al treinta de junio de dos mil veinte
SS/15/2020	Del uno al quince de julio de dos mil veinte
SS/17/2020	Del dieciséis al veinticuatro de julio de dos mil veinte
SS/19/2020	Del veintisiete al treinta y uno de julio de dos mil veinte
SS/20/2020	Se levanta la suspensión de actividades jurisdiccionales y comienzan a correr plazos a partir del tres de agosto de dos mil veinte

En consecuencia, el término de quince días previsto en el primer párrafo del diverso 17 de la ley de la materia, transcurrió del **diecisiete de marzo al veinte de agosto de dos mil veinte**, debiendo descontar *-además de los días de suspensión precisados en el cuadro anterior-* el ocho, nueve, quince y dieciséis de agosto, todos del año en curso, por corresponder a sábados y domingos; en consecuencia, inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

CUARTO. Certeza del acto reclamado. La existencia del acto reclamado quedó debidamente acreditada con el informe justificado rendido por la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que obra a foja dos del expediente en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178, fracción III, de la Ley de Amparo, así como con la copia certificada de las constancias que integran el expediente electrónico del juicio de nulidad en línea, en el que se dictó la sentencia reclamada.

Cabe mencionar, que se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de agravio hechos valer,



atento al criterio jurisprudencial 2a./J 58/2010¹ de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."

SEXTO. Motivos y fundamentos del acto reclamado. Corresponde analizar las consideraciones que sustentan el sentido del fallo reclamado, en el que se reconoció la validez de la resolución impugnada, en los términos que a continuación se narran.

Son infundados los conceptos de impugnación primero y segundo, en los que la actora refiere que los fundamentos y motivos expresados en la resolución impugnada son insuficientes para imponer la multa controvertida.

El artículo 53, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, establece que cuando la autoridad fiscal solicite a los contribuyentes *-entre otros sujetos-* informes o documentos, estos se deberán presentar en un plazo de quince días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva.

Las autoridades fiscales podrán ampliar por diez días más el plazo referido, cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil obtención.

¹ Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830.

Al resolver el amparo en revisión 763/2010, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el otorgamiento de una prórroga para el cumplimiento del requerimiento constituye una facultad discrecional de la autoridad fiscal, la cual no se ejerce de forma arbitraria, ya que se le impone la obligación de plasmar un juicio de valoración en el que *-apreciando las peculiaridades y condiciones del caso concreto-* determinará la procedencia de la prórroga respectiva, tratándose de informes cuyo contenido resulte difícil de proporcionar o de difícil obtención.

La interpretación que debe darse al término “podrán” contenido en el artículo 53, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, es de una facultad discrecional que debe fundarse y motivarse.

Si bien, el artículo citado no impone la obligación de los contribuyentes, para acreditar que la información solicitada es difícil de obtener o difícil de proporcionar, lo cierto es que sí deben aportar elementos a la autoridad fiscal para que ésta pueda determinar que la información solicitada se ubica en la hipótesis que prevé el artículo 53, último párrafo, del código federal tributario.

A través de los escritos presentados el dieciséis de abril y el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, la actora solicitó la prórroga a efecto de poder exhibir la documentación e información que le fue requerida, manifestando que los informes, datos y documentos solicitados representaban una cantidad significativa de información y documentación que para ser recabada, analizada, integrada y proporcionada requería una representativa carga administrativa adicional, toda vez que era de difícil obtención por ser de ejercicios anteriores.



Al negar la prórroga solicitada, la autoridad manifestó que dicha información era parte de la contabilidad que la actora está constreñida a llevar para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con los artículos 28 y 30 del Código Fiscal de la Federación y 33 de su reglamento, vigentes en dos mil catorce.

Si bien la autoridad demandada negó la prórroga solicitada, lo cierto es que le formuló dos requerimientos respecto de la misma información y documentación, ya que fue omisa en exhibirla de manera total y completa.

De las constancias que obran en autos, se observa que entre el primero y segundo requerimientos que realizó la autoridad, transcurrieron casi cuatro meses sin que la accionante exhibiera la información y documentación faltante, haciéndose acreedora a una primera multa, impuesta previamente a la impugnada en el juicio.

Con independencia de que la enjuiciada no otorgó las prórrogas solicitadas, la accionante fue omisa en cumplir con los requerimientos formulados, existiendo un tiempo suficiente entre cada requerimiento para su desahogo.

No pasa inadvertido que el requerimiento versó respecto de información de servicios que fueron prestados o recibidos por la justiciable, los cuales no eran de difícil obtención o de difícil exhibición; en todo caso, si la información no se encontraba en su poder, así debió manifestarlo a la autoridad fiscal, con independencia que *-al formar parte de su contabilidad-* tiene la obligación de contar con esos datos.

Adverso a lo sostenido por la actora, sí se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que la multa debatida fue impuesta ante la omisión de proporcionar de forma completa la documentación e información solicitada; en la inteligencia que la infracción abarca tanto el incumplimiento total como el incumplimiento parcial, pues el precepto normativo no hace distinción.

La autoridad demandada sí señaló los motivos y razones por los que consideró que se actualizaba la hipótesis prevista en el artículo 85, fracción I, justificando la imposición de la multa por el monto máximo que establece el artículo 86, fracción I, y precisando que se actualizaba la reincidencia como agravante establecida en el diverso 75, primer párrafo, fracción I, inciso b), numerales todos del Código Fiscal de la Federación vigente.

No se soslaya que la autoridad demanda consideró los elementos que le permitían individualizar la multa controvertida, pues señaló los motivos y fundamentos por los que estimó que se actualizaron los daños producidos o susceptibles de producirse; el carácter intencional de la acción u omisión; la gravedad de la infracción, y la reincidencia del infractor.

Contrario a lo que alega la accionante, la determinación de gravedad de la conducta no deriva de su previsión en la norma, sino de los motivos que la autoridad demandada tomó en cuenta para su calificación, pues *-en el caso-* consideró que la conducta de la actora se agrava derivado de que en dos ocasiones fue omisa en aportar la totalidad de la documentación e información que le fue requerida, a fin de que la autoridad fiscal pudiera llevar a cabo la determinación de su situación fiscal.



Por lo que hace al factor de capacidad económica, la autoridad precisó que la actora tiene el carácter de gran contribuyente, de conformidad con lo establecido por el artículo 28, Apartado B, fracción III, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, lo que implica que tiene ingresos acumulables anuales mayores a mil doscientos cincuenta millones de pesos.

Es improcedente la devolución del pago de la multa, pues la actora no acreditó en el juicio su ilegalidad y, por ende, se reconoció la validez de la resolución impugnada.

Esta es la sentencia reclamada en el juicio de amparo directo que se resuelve.

SÉPTIMO. Estudio. Por cuestión de técnica, los conceptos de violación se analizarán de forma conjunta, según lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo.

La quejosa aduce que la sentencia reclamada es violatoria de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la autoridad responsable aplicó indebidamente las disposiciones legales que sustentan el sentido del fallo, por las razones que a continuación se exponen.

En el caso, no se configura la conducta prevista en el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, por tanto, resulta improcedente la imposición de la multa establecida en el numeral 86, fracción I, de ese ordenamiento.

La *a quo* soslaya que la hipótesis contenida en el invocado artículo 85, fracción I, se actualiza cuando la conducta de los contribuyentes sea de no hacer; sin embargo, la quejosa solicitó las prórrogas a que hace referencia el artículo 53 del Código Fiscal de la Federación, de ahí que no se actualice el supuesto de infracción por el que fue sancionada.

No existió incumplimiento de los requerimientos que le fueron formulados, pues en ningún momento se negó a presentar la información, sino que entregó aquella que tenía a su alcance y, por el resto, solicitó un plazo mayor para recabarla y exhibirla, por tratarse de documentación que resulta compleja, de gran volumen y, por tanto, difícil de obtener y proporcionar.

Sin que obste a lo anterior que la autoridad fiscal negara la prórroga que solicitó, pues ello resulta insuficiente para sustentar la imposición de la multa, habida cuenta que la quejosa no adoptó una postura de omisión, sino que atendió los requerimientos correspondientes exhibiendo de manera parcial la información solicitada.

La autoridad responsable fue omisa en tomar en cuenta un criterio emitido por el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa que categóricamente señala que no se actualiza la infracción prevista en el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, cuando el destinatario del requerimiento desahogue parcialmente y *-a su vez-* solicite prórroga con fundamento en el artículo 53 del referido Código.

El invocado artículo 53 sólo prevé la posibilidad de ampliar el plazo por diez días más, cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil obtención, sin que ahí se faculte a la autoridad para negar la prórroga solicitada al considerar que no se trata de esa clase de información.



El hecho de que la información solicitada se encuentre en poder del contribuyente por corresponder a la contabilidad que está obligado a llevar, no le quita el carácter de difícil de proporcionar, ya que dicha información y documentación fue solicitada a manera de integraciones especiales.

Adverso a lo sostenido por la autoridad responsable, el hecho de que el artículo 53 del Código Fiscal de la Federación establezca que las autoridades fiscales “podrán” ampliar el plazo ahí previsto, no implica una facultad discrecional, en el entendido que el verbo faculta a la autoridad en el caso de que se cumplan los supuestos para su aplicación, esto es, que se trate de información difícil de proporcionar o de difícil obtención.

Las facultades regladas existen cuando la norma señala las consideraciones para su aplicación, las cuales obligan a la autoridad a cumplir como la ley dispone y en esa medida el verbo “podrán” que se utiliza en el invocado artículo 53, no ha de entenderse en el sentido de que el legislador otorgó a la autoridad administrativa la facultad discrecional de dar, o no, las prórrogas para la presentación de la información solicitada, pues el alcance de la norma no radica en el significado puramente gramatical que se le pide al término aludido.

En el caso, la autoridad debió otorgar las prórrogas solicitadas por la quejosa, habida cuenta que se le requirió información de difícil obtención, por lo que se actualizó el supuesto de la facultad concedida al efecto, en el entendido de que la ampliación del plazo para la presentación de documentos o informes de difícil obtención, es un beneficio que el legislador otorgó a los contribuyentes por ser quienes enfrentan la situación de dificultad para obtener lo requerido, por lo que afirmar

que sólo la autoridad puede a su arbitrio, hacer uso de esa facultad, implicaría restringir el derecho que la ley concede en beneficio de los sujetos obligados.

El hecho de que la información y documentación que le fue requerida forme parte, o no, de su contabilidad, no es fundamento ni motivo para negar la ampliación de los plazos a que hace referencia el artículo 53, inciso c) segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, ni mucho menos para la imposición de multas.

Si la autoridad fiscal *-al ejercer sus facultades-* sólo puede requerir al contribuyente su contabilidad y no la de terceros, resulta evidente que la prórroga establecida en el citado artículo 53, se refiere al supuesto en que la autoridad requiere al contribuyente su contabilidad.

No obstante, de la simple revisión a la documentación que le requirió la autoridad hacendaria se puede advertir que no toda forma parte de su contabilidad, ya que le solicitó información y documentación relacionada con papeles de trabajo muy detallados, con datos precisos, balanzas de comprobación e integraciones especiales, entre otros.

Si bien se pueden obtener de los datos que integran su contabilidad, lo cierto es que de momento no forman parte de ésta, al tratarse de integraciones especiales, con datos y especificaciones que solicita la autoridad, como realizar diversos cruces de información relacionada con la totalidad de las operaciones que realizó en un ejercicio fiscal, situación que evidentemente implica una gran carga administrativa para la quejosa.

Al ejercer sus facultades de comprobación, la autoridad debe limitarse a solicitar los documentos, datos e informes que conforman la contabilidad de la

contribuyente, respetando la manera en que ésta la lleva, y no solicitar que le sean proporcionados a manera de integraciones, de la forma concreta y específica en que la propia autoridad lo indique.

El hecho de que un contribuyente considere que la información y documentación solicitada es de difícil obtención, es suficiente para que la autoridad fiscal conceda la ampliación del plazo para dar cumplimiento al requerimiento formulado para tal efecto.

La *a quo* se limita a señalar que la quejosa no acreditó que la información solicitada en el procedimiento de fiscalización consistiera en integraciones especiales, fuera de difícil obtención o voluminosa, o bien, no formara parte de su contabilidad, soslayando que en la demanda de nulidad hizo referencia a la información solicitada y que se puede corroborar de un análisis superficial a la resolución impugnada.

El artículo 53 del Código Fiscal de la Federación, únicamente señala que se podrán ampliar los plazos otorgados por las autoridades fiscales para desahogar un requerimiento, cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil obtención, sin que prevea que deban acreditarse los motivos y circunstancias que la llevaron a solicitar las prórrogas.

Los argumentos reseñados son **infundados** en una parte, e **insuficientes** en otra.

El Código Fiscal de la Federación, tratándose de la solicitud de informes o documentos del contribuyente, responsable solidario o tercero, con motivo de las

Artículo 53. En el caso de que con motivo de sus facultades de comprobación, las autoridades fiscales soliciten éstos informes o documentos del contribuyente, responsable solidario o tercero, se estará a lo siguiente:

[...]

Los plazos a que se refiere este inciso, se podrán ampliar por las autoridades fiscales por diez días más, cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil obtención.

Para lograr el cumplimiento de esas obligaciones, el legislador previó que oponerse a que se practique una visita domiciliaria o no suministrar los datos e informes que



Artículo 85. Son infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación las siguientes:

I. Oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal. No suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales; no proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores y en general, los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros, o no aportar la documentación requerida por la autoridad conforme a lo señalado en el artículo 53-B de este Código.

[...]

Esas infracciones están sancionadas con multa en términos del diverso artículo 86, fracción I, del mismo ordenamiento, que dice:

Artículo 86. A quien cometa las infracciones relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 85, se impondrán las siguientes multas:

I. De \$17,370.00 a \$52,120.00 a la comprendida en la fracción I.

[...]

De las normas reproducidas se advierte que la autoridad hacendaria está facultada para imponer sanciones en los casos en que los contribuyentes sujetos a una visita domiciliaria incumplan sus obligaciones formales

La multa fiscal es propiamente una pena o sanción impuesta por el Estado en su calidad de ente público y tiene como fin primordial que los sujetos pasivos de la obligación tributaria **no incurran en omisión en su cumplimiento**. Atiende al poder represivo o potestad sancionadora del Estado, ya que es la consecuencia a la conducta infractora, producida por el incumplimiento del deber tributario, de naturaleza represiva, intimidatoria e incluso ejemplificativa, la cual no libera al infractor de la obligación no acatada.

Sobre tales premisas, **no asiste razón** a la quejosa cuando afirma que no existió incumplimiento a los requerimientos que le fueron formulados, dado que en ningún momento se negó a presentar la información, sino



que entregó aquella que tenía a su alcance, pues la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 85 del Código Fiscal de la Federación no distingue entre incumplimiento parcial o total, habida cuenta que la conducta infractora deriva de no proporcionar toda la información y documentación que la autoridad requiere para poder determinar la situación fiscal del contribuyente, responsable solidario o de terceros relacionados con éstos.

Elo es así, pues el régimen de infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación, no atiende a la intencionalidad o no intencionalidad del sujeto pasivo de la obligación, sino al obstáculo que representa el incumplimiento del deber tributario para que las autoridades desarrollen el procedimiento fiscalizador en los tiempos establecidos en el Código Fiscal de la Federación.

En todo caso, existen atenuantes y agravantes que sirven para individualizar la multa, las cuales atienden a circunstancias como la gravedad de la infracción, la capacidad contributiva del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva *-entre otras-* que operan únicamente en la determinación del *quantum* de la sanción, pero no como un elemento para considerar la actualización del supuesto que prevé la infracción.

Por tanto, no beneficia a la quejosa su afirmación de que la hipótesis contenida en el invocado artículo 85,

Por otra parte, son **insuficientes** los argumentos restantes dirigidos a demostrar que la negativa de la prórroga fue ilegal, pues no combate uno de los motivos en los cuales se sustenta el fallo, relativo a que, con independencia de que la demandada no otorgó la prórroga solicitada por la aquí quejosa, transcurrió tiempo suficiente entre cada requerimiento para que la actora proporcionara la información, a pesar de lo cual, no lo hizo.

En efecto, la *a quo* destacó que, si bien la autoridad fiscal negó la prórroga solicitada, lo cierto era que le hizo dos requerimientos respecto de la misma información y documentación, advirtiéndole de las constancias que obraban en autos, que entre ambos requerimientos transcurrieron casi cuatro meses sin que la aquí quejosa exhibiera la información y documentación faltante.

La apreciación de la Sala se sustentó en los antecedentes del caso, de los cuales se desprende lo siguiente:



1. Por oficio número *****
de **veinticinco de marzo de dos mil diecinueve**, la
Administradora de Fiscalización a Grupos de
Sociedades “5”, requirió a *****
***** ** ***** *****, a efecto que *-en el plazo de
quince días hábiles-* presentara diversas información y
documentación correspondiente al ejercicio fiscal de
dos mil trece.

2. Por escrito presentado el **dieciséis de abril de dos mil diecinueve**, en la oficialía de partes de la Administración Central de Grandes Contribuyentes, la aquí quejosa exhibió parcialmente la información y documentación requerida, solicitando *-a su vez-* una prórroga para presentar la información restante.

3. Mediante oficio número *****
 **** de **cuatro de junio de dos mil diecinueve**, la
 autoridad fiscal negó la prórroga solicitada, por lo que
 a través del diverso número *****
 **** de **diecisiete de junio posterior**, impuso a la
 contribuyente una multa en cantidad de \$*****
 (***** ***) ***** *****
 moneda nacional), con motivo del incumplimiento al
 requerimiento efectuado.

4. Por oficio numero *****
de **cinco de julio de dos mil diecinueve**, la autoridad
tributaria requirió nuevamente a la contribuyente
quejosa, la información y documentación pendiente de
proporcionar.

5. A través de los escritos presentados ante la autoridad fiscal en fechas **dieciséis y treinta de agosto de dos mil diecinueve**, la contribuyente exhibió diversa información y documentación, solicitando *-nuevamente-* una prórroga para cumplir con

6. En dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, la autoridad demandada emitió el oficio número ***** , a través del cual impuso a la aquí quejosa una multa en cantidad de \$***** (***** * *** **** ***** ***** ***** moneda nacional) con motivo del incumplimiento al requerimiento de información y documentación formulado el cinco de julio del año en cita.

7. Inconforme con la determinación anterior, la empresa quejosa promovió demanda de nulidad, de la cual derivó el fallo reclamado.

De esta narrativa se sigue que la autoridad fiscal realizó un primer requerimiento el **veinticinco de marzo de dos mil diecinueve**, notificado a la quejosa el veintiséis de marzo siguiente, el cual fue cumplido de forma parcial, mediante escrito presentado ante la autoridad el **dieciséis de abril del año en cita**, en el que solicitó una primera prórroga, resuelta en sentido negativo el **cuatro de junio de ese año**.

Derivado del incumplimiento parcial, el diecisiete de junio de dos mil diecinueve se le impuso una multa, siendo que el **cinco de julio posterior**, la autoridad requirió nuevamente a la quejosa para que exhibiera la información y documentación faltante, **otorgándole un nuevo plazo de quince días hábiles**, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación respectiva.



A la luz de estos antecedentes, la Magistrada responsable llegó a la conclusión de que la negativa de la prórroga por parte de la autoridad fiscal no justificaba la omisión de la actora, pues a pesar de ella, había gozado de tiempo suficiente para exhibir la documentación, habida cuenta que la misma fue materia de un requerimiento anterior.

En estas condiciones, si la parte quejosa no combate frontalmente estas consideraciones, pues únicamente endereza sus argumentos a demostrar que la negativa de ampliar el plazo para atender el requerimiento es ilegal, resultan **insuficientes** sus argumentos.

Ciertamente, la negativa de la autoridad hacendaria para ampliar por diez días más el plazo establecido en el inciso c) del artículo 53 del Código Fiscal de la Federación es inconducente para desvirtuar la conducta infractora, pues ese hecho no le impedía que cumpliera con el requerimiento, aún cuando entregara la información y documentación de forma extemporánea, pues resulta evidente que entre el primero y el segundo requerimientos transcurrieron en exceso más de los veinticinco días hábiles con que hubiera contado la quejosa para su desahogo de haberse concedido la prórroga.

En esta línea argumentativa, son **ineficaces** los argumentos encaminados a demostrar que la atribución de la autoridad para ampliar el plazo en términos del último

Como ya se dijo, la sala señaló que la negativa para conceder la ampliación del plazo en cuestión de ninguna manera le impidió contar con un lapso prudente para cumplir con lo solicitado, pues la autoridad efectuó un segundo requerimiento respecto de la misma información y documentación faltante, otorgándole un nuevo plazo de quince días (que observa este tribunal, es mayor a la prórroga peticionada), y en contra de esta consideración que determina el sentido del fallo, la quejosa no se inconforma.

Son aplicables las tesis jurisprudencial y aislada, respectivamente, sustentadas por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros:



CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.²

CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA.³

Por otra parte, aun cuando es fundada la afirmación de la quejosa en el sentido de que la Magistrada responsable se limitó a sostener que la documentación e información solicitada se encontraba en su poder por corresponder a la contabilidad que está obligada a llevar, sin ocuparse del argumento relativo a que la autoridad fiscal no está facultada para requerirla a manera de integraciones especiales, pues no está expresamente especificado en la ley; ello no conduce a otorgar el amparo solicitado por las razones que a continuación se exponen.

En el primero y una parte del segundo conceptos de impugnación de la demanda de nulidad, la justiciable argumentó lo siguiente:

La autoridad demandada le requirió información bastante específica, como lo era el papel de trabajo y la documentación que acreditara que las pérdidas fiscales pendientes de amortizar en dos mil trece, provenientes de la escisión de *****

² Consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Sexta Época, volumen CXXVI, cuarta parte, página 27. Registro: 269435.

³ Consultable en el Seminario Judicial de la Federación. Séptima Época, Volumen 139-144, Cuarta Parte, página 26. Registro: 240779

***** ** ***** ***** , derivaban del mismo giro que las utilidades generadas por la contribuyente quejosa en ese ejercicio fiscal, tales como contratos, facturas en las que se observara el tipo de ingresos obtenidos, entre otra documentación.

Al ejercer sus facultades de comprobación, la autoridad debe limitarse a solicitar los documentos, datos e informes que conforman la contabilidad de la contribuyente, respetando la manera en que ésta la lleva, y no solicitar que le sean proporcionados a manera de integraciones, de la forma concreta y específica en que la propia autoridad lo indique.

De esa manera el gobernado se ve en la necesidad de elaborar papeles de trabajo o “integraciones especiales” que, si bien pueden ser obtenidos a partir de los datos contenidos en la contabilidad, lo cierto es que de momento no forman parte de la misma.

La autoridad demandada no puede concluir que la totalidad de la información y documentación solicitada forme parte de su contabilidad, puesto que el criterio para sostener que se trata de elementos que la integran, es que se encuentren listados en los artículos 28 del Código Fiscal de la Federación y 33 de su Reglamento.

Sustenta lo anterior, en las tesis emitidas por la Primera Sección y el Pleno Jurisdiccional -respectivamente- de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de rubros:

CONTABILIDAD, EL CONTRIBUYENTE NO ESTÁ OBLIGADO A PRESENTARLA ANTE LA AUTORIDAD FISCAL EN FORMA DE INTEGRACIONES ESPECIALES.

DEDUCCIONES DECLARADAS. EL CONTRIBUYENTE NO ESTÁ OBLIGADO A EXHIBIR

ANTE LA AUTORIDAD LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EN QUE SOPORTE LAS MISMAS A TRAVÉS DE INTEGRACIONES ESPECIALES PARA DEMOSTRAR SU PROCEDENCIA.

En términos del artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales están facultadas para requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o a través del buzón tributario *-dependiendo de la forma en que se efectuó el requerimiento-* la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión.

El precepto normativo, dice:

Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados o los asesores fiscales han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

[...]

Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectuó el requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes

[...]

Tales formalidades implican, entre otras cuestiones, que el requerimiento deberá estar fundado y motivado. Para satisfacer este requisito, la autoridad hacendaria debe señalar:

- 1) El medio en que se encuentre la información, esto es, documentos, papeles de trabajo, cuentas, libros, comprobantes fiscales, sistemas y registros contables,



electrónicos, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos;

2) El tipo de contribución que genera la solicitud de la información; y,

3) El período cuya revisión se va a verificar.

En ese sentido, cuando la autoridad fiscal ejerce sus facultades de comprobación, cuenta con cierto arbitrio para requerir que el contribuyente proporcione la información y documentación que conforme al Código Fiscal de la Federación y su Reglamento deba integrar la contabilidad *-en el caso de que esté obligado a llevarla-* y que considere pertinente a fin de cerciorarse del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, a condición de que se dé un ejercicio prudente de tal arbitrio, es decir, que la autoridad parta de hechos objetivos y de datos comprobados que justifiquen la necesidad de obtener tal o cual información o documentación.

Es ilustrativa del tema, la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, de rubro y texto siguientes:

FACULTAD DISCRECIONAL O DE ARBITRIO, DEBE RESPETARSE LA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. Debe respetarse por lo general, en el juicio de amparo, el uso que la autoridad administrativa haga de su poder discrecional o de la facultad de arbitrio que la ley le concede, a condición de que se dé un ejercicio prudente de tal arbitrio, es

*decir, que la autoridad parta de hechos objetivos y de datos comprobados y, sobre la base de éstos, elabore argumentaciones que no pugnen con las reglas de la lógica ni con las máximas de la experiencia.*⁴

En el caso, conviene tener presente que el requerimiento formulado mediante oficio *****
***** de cinco de julio de dos mil diecinueve tiene origen en el procedimiento a que se refiere el artículo 52-A, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, que prevé la facultad de la autoridad fiscal para requerir directamente al contribuyente la información y documentos que considere convenientes para cerciorarse del cumplimiento de sus obligaciones, cuando habiéndola recibido del contador público que dictaminó los estados financieros de éste, estime que fue insuficiente para observar la situación fiscal del sujeto pasivo revisado.

Los términos en que se formuló el requerimiento de mérito *-en la parte de interés-* son:

"I. [...]"

4. Respecto a lo manifestado por el C.P.I. *****
*****, en contestación a la respuesta a la pregunta 13 y 19 del acta de comparecencia dicho C.P.I. manifestó lo siguiente:

! ...

por otra parte, ***** obtuvo servicios administrativos especializados en diversas áreas como se explica a continuación:

***** * ***** ** *****

**** * (PASI) – Administración y Finanzas a la

⁴ Consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Sexta Época, sexta parte, tomo LV, página 17. Registro: 267114.



producción, relaciones públicas, auditoría interna, compras, administración de activo fijo, ingeniería y sistemas, servicios generales, principalmente.

***** ** *****

**** ** **. (PEPRTVA) – Administración y Finanzas, a la producción, relaciones públicas, auditoría interna, compras, administración de activo fijo, ingeniería y sistemas, servicios generales, contables, legales, tesorería y control de pagos, planeación y presupuestos, principalmente.

***** ***** ***** ***** ** ***** (SPA) –

en el Área de Ingeniería y Sistemas.'

a) Al respecto, explique detalladamente en qué consistieron los servicios recibidos por sus partes relacionadas

***** ** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

b) Aporte los contratos celebrados con sus prestadores de servicios con sus respectivos anexos, adendums, modificaciones, convenios, etc.

c) Aporte papel de trabajo impreso y en archivo electrónico formato (.xlsx) donde integre el nombre, RFC y número de seguridad social de las personas con las cuales

***** **** ** ***, llevó a cabo las operaciones o

prestación de los servicios que generaron los ingresos acumulables por el periodo comprendido del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, mencionando la relación laboral que tienen con la contribuyente.

d) Bitácoras o reportes donde detallen las actividades que cada persona física llevó a cabo.

e) *Entregables recibidos con motivo de los servicios contratados.*

[...]

II. [...]

...

2. De la revisión a la información y documentación proporcionada en respuesta al numeral 5 del oficio antes

...

1

**** ****** *al momento de la escisión, así como la*



determinación de la transmisión de las pérdidas fiscales en comento y la integración de las pérdidas fiscales transmitidas a mi mandante en virtud de la escisión. Adicionalmente, se manifiesta que la actividad preponderante que generó las pérdidas fiscales que tenía ***** **** **, como sociedad escidente a la fecha de la escisión, era su actividad comercial. Finalmente, el fundamento legal que permita disminuir dichas pérdidas contra las utilidades generadas por mi representada, es el artículo 61 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2013.'

Derivado de lo anterior, se solicita lo siguiente:

[...]

• En su caso, proporcionar papel de trabajo, así como la documentación que acredite que las pérdidas fiscales pendientes de amortizar en 2013, provenientes de la escisión de ***** ** ***, provienen del mismo giro que las utilidades generadas en el mismo ejercicio por ***** ** ***, como son contratos, facturas, en las que se observe el tipo de ingresos obtenidos, entre otra documentación.

4. Con fundamento en el artículo 63, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, se consultó la dirección electrónica denominada 'Consejería Jurídica y de servicios legales' a través de la cual se conoció la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 12 de noviembre de 2009, en la cual se publicó el Aviso de Escisión de la sociedad denominada ***** ** ***, a través de la cual se conoció que las 'cuentas por cobrar partes relacionadas', transmitidas a *****, no provienen de la explotación de servicios de telecomunicaciones, tal y como se observa a continuación:

[...]

Derivado de lo anterior, se solicita lo siguiente:

• Indique cuáles fueron las operaciones que originaron las cuentas por cobrar que le fueron transmitidas a

- Indique de qué manera cumplió con lo establecido en el artículo 61 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para la transmisión de las pérdidas fiscales que fueron amortizadas en el ejercicio en revisión de 2013.
- Indique la razón y el fundamento legal para considerar la transmisión de las pérdidas fiscales en proporción a las cuentas por cobrar que le fueron transmitidas a ***** **** ** **, aun y cuando las mismas no provenían de la actividad preponderante de la escidente, tal y como lo dice la nota de la publicación de la escisión en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 12 de noviembre de 2009.
- Aporte la documentación que compruebe su dicho, consistente en papeles de trabajo, pólizas contables, comprobantes fiscales, contratos, entre otra documentación."

En ese sentido, la información y documentación comprobatoria que le requirió la autoridad demandada forma parte de la contabilidad que está obligada a llevar de conformidad con lo establecido en los artículos 28 y 30 del Código Fiscal de la Federación; 29, 32, 33 y 34 de su Reglamento *-vigentes en el ejercicio fiscal revisado-* los cuales, en la parte de interés, dicen:

Código Fiscal de la Federación

Artículo 28. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente:

I. La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y



método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes; en el Reglamento de este Código se establecerá la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción, y los elementos adicionales que integran la contabilidad.

[...]

Artículo 30. Las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservarla a disposición de las autoridades fiscales de conformidad con la fracción III del artículo 28 de este Código.

[...]

... Tratándose de las actas constitutivas de las personas morales, de los contratos de asociación en participación, de las actas en las que se haga constar el aumento o la disminución del capital social, la fusión o la escisión de sociedades, de las constancias que emitan o reciban las personas morales en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta al distribuir dividendos o utilidades, de la información necesaria para determinar los ajustes a que se refieren los artículos 22 y 23 de la ley citada, así como de las declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio, de las contribuciones federales, dicha documentación deberá conservarse por todo el tiempo en el que subsista la sociedad o contrato de que se trate.

[...]

En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo facultades de comprobación respecto de ejercicios fiscales en los que se disminuyan pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, o se reciban cantidades por concepto de préstamo, otorgado o recibido, independientemente del tipo de contrato

utilizado, los contribuyentes deberán proporcionar la documentación que acredite el origen y procedencia de la pérdida fiscal o la documentación comprobatoria del préstamo, independientemente del ejercicio en el que se haya originado la pérdida o el préstamo....

[...]

Reglamento del Código Fiscal de la Federación

Artículo 29.- Para los efectos del artículo 28, fracción I del Código, los sistemas y registros contables deberán llevarse por los contribuyentes mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro o procesamiento que mejor convenga a las características particulares de su actividad, pero en todo caso deberán satisfacer como mínimo los requisitos que permitan:

I. Identificar cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con la documentación comprobatoria, de tal forma que aquéllos puedan identificarse con las distintas contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo las actividades liberadas de pago por las disposiciones aplicables;

II. Identificar las inversiones realizadas relacionándolas con la documentación comprobatoria, de tal forma que pueda precisarse la fecha de adquisición del bien o de efectuada la inversión, su descripción, el monto original de la inversión y el importe de la deducción anual;

III. Relacionar cada operación, acto o actividad con los saldos que den como resultado las cifras finales de las cuentas;

IV. Formular los estados de posición financiera;

V. Relacionar los estados de posición financiera con las cuentas de cada operación;

VI. Contar con la documentación e información de los registros de todas las operaciones, actos o actividades y garantizar que se asienten correctamente, mediante los sistemas de control y verificación internos necesarios;

[...]



Artículo 32.- Para los efectos de este Capítulo, en el libro diario, el contribuyente deberá anotar en forma descriptiva todas sus operaciones, actos o actividades siguiendo el orden cronológico en que éstos se efectúen, indicando el movimiento de cargo o abono que a cada una corresponda.

En el libro mayor deberán anotarse los nombres de las cuentas de la contabilidad, su saldo al final del periodo de registro inmediato anterior, el total del movimiento de cargo o abono a cada cuenta en el periodo y su saldo final.

Podrán llevarse libros diario y mayor por establecimientos o dependencias, por tipos de actividad o por cualquier otra clasificación, pero en todos los casos deberán existir los libros diario y mayor general en los que se concentren todas las operaciones del contribuyente.

Artículo 33.- Para los efectos del artículo 28, fracción I del Código, los contribuyentes que efectúen enajenaciones a plazo, con pago diferido o en parcialidades, o celebren contratos de arrendamiento financiero y opten por diferir la causación de contribuciones conforme a las disposiciones fiscales respectivas, deberán llevar en su contabilidad registros que permitan identificar la parte correspondiente de las operaciones en cada ejercicio fiscal, inclusive mediante cuentas de orden.

Artículo 34.- Para los efectos de los artículos 28, fracción I y 30-A, primer párrafo del Código, cuando el contribuyente adopte el sistema de registro electrónico, deberá conservar y almacenar como parte integrante de su contabilidad toda la documentación relativa al diseño del sistema y los diagramas del mismo, poniendo a disposición de las autoridades fiscales el equipo y sus operadores para que las auxilien cuando éstas ejerzan sus facultades de comprobación y, en su caso, deberá cumplir con las

alternativas t
autoridad
ad, hab
tica y en
es a c
n el cu
como p

obligaci
l origen
ndencia
l sujeto
de cons
nto del

dependencia
documentos
ad al tra
datos p
n *-desde*
pues co
d de co
ntación

Lo anterior, con independencia de que la quejosa se duela que la información y documentación solicitada no forma parte de su contabilidad al tratarse de papeles de trabajo muy detallados, con datos precisos, balanzas de comprobación cuya integración *-desde su perspectiva-* implica una gran carga administrativa; pues como ya se dijo, ello no la exime de la responsabilidad de conservar debidamente su contabilidad y la documentación comprobatoria de la misma, en términos de las disposiciones referidas.



Además, no se advierte que el requerimiento formulado resulte irracional o excesivo ya que la información y documentación solicitada deriva de la insuficiencia de aquélla que aportó el contador público que dictaminó los estados financieros de la quejosa, guarda estrecha relación con los hechos observados por la autoridad, pero sobre todo, forma parte de la contabilidad que se encuentra obligada a llevar y conservar; máxime, que resulta necesaria para poder determinar su situación fiscal.

Sirve de apoyo a lo anterior *-por las razones que informa-* la tesis jurisprudencial 2a./J. 94/2013 (10a.)⁵, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto:

FACULTADES DE VERIFICACIÓN. LA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 52-A, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE, DEBE MOTIVARSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38 DEL PROPIO CÓDIGO. Conforme al artículo 52-A, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación revisen el dictamen de los estados financieros formulado por el contador público registrado, primeramente le requerirán cualquier información que por disposición legal debiera estar

⁵ Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Decima Época, libro XXII, julio de 2013, tomo 1, página 887. Registro: 2003992.

NORMA ANGELICA BENAVIDES VARELA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.01.33.d
05/10/23 13:31:07



ocasionen al particular, y en la especie se advierte que si la información faltante no fuera tomada en cuenta al momento de emitirse la resolución definitiva, eso significa que la petición de ella no ocasionó daño alguno al contribuyente, y por el contrario, si la misma fue decisiva en el resultado al que se llegó, ello será signo inequívoco de que los datos aportados por el propio contribuyente eran indispensables para concluir la revisión, por lo que la motivación para allegarla a su expediente la expondrá la autoridad cuando en el documento con el que culmine el ejercicio de sus facultades de comprobación determine algún crédito, en su caso.

En este orden de ideas, resulta infundado el argumento en estudio, en donde sostiene que de acuerdo con el criterio sostenido por el tribunal responsable, la autoridad fiscal carece de atribuciones para exigir la elaboración de integraciones especiales, toda vez que ha quedado demostrado que, como se afirmó en la sentencia, la información requerida corresponde a la que debe tener la quejosa en su contabilidad y como soporte de los registros y operaciones revisadas por la autoridad fiscal y no demuestra que *-específicamente-* alguna parte de esa información suponga la producción de contenidos distintos de aquellos que la autoridad puede requerirle para constatar el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

Por otra parte, es **ineficaz** lo que alega la quejosa, en el sentido de que la autoridad responsable fue omisa en tomar en cuenta un criterio emitido por el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa que categóricamente señala que no se actualiza la infracción prevista en el

Lo anterior así se estima, pues la quejosa soslaya que las salas *-en forma colegiada-* así como los magistrados instructores de manera unitaria, conservan su arbitrio judicial para decidir cada caso en concreto, mientras no desacaten algún criterio jurisprudencial emitido por el Pleno o las Secciones de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos del artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Además, no basta la invocación de lo resuelto en otra Sala regional, ya que no es vinculatorio para las diversas salas y sus magistrados instructores por no actualizarse el supuesto del invocado artículo 79 de la ley de la materia; por tanto, es potestativo para la Magistrada instructora responsable orientarse por el precedente que refiere la demandante, y el no seguirlo *-per se-* no torna ilegal su actuar.

En efecto, es inherente a la función jurisdiccional, la autonomía e independencia con que cuentan los juzgadores para resolver sobre la legalidad de las resoluciones administrativas impugnadas, atendiendo al análisis de las circunstancias y hechos acontecidos en cada caso particular.



De igual manera, en nada beneficia a la quejosa los precedentes que cita en su demanda de amparo, pues con independencia de que lo resuelto por las diversas salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no resulta vinculatorio para este órgano colegiado, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, las consideraciones que sostienen los fallos que invoca, se desvirtúan por los motivos y fundamentos expresados en esta sentencia.

Dada la conclusión alcanzada, no es el caso de realizar mayor pronunciamiento en relación con las manifestaciones vertidas por las autoridades tercero interesadas en vía de alegatos, pues de su lectura íntegra no se advierte que invoquen ningún motivo de inejercitabilidad de la acción constitucional que originó este juicio de amparo, ya que únicamente están encaminados a defender la legalidad de la sentencia reclamada.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial P./J. 26/2018 (10a.) del Tribunal Pleno, cuyo rubro es:

ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.⁶

⁶ Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época, libro 60, noviembre de 2018, tomo I, página 5. Registro: 2018276

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73 a 76, 184, 185, 186, 188, y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:

Notifíquese; y con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la Sala de origen y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así por **unanimidad** de votos de la **Magistrada Presidenta María del Pilar Bolaños Rebollo**, de la **Magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos** y del **Magistrado Marco Antonio Cepeda Anaya**, lo resolvió en **sesión ordinaria virtual** el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 186, primer párrafo, y 188, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, 1º, 2, fracción V y 27, fracción III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno



del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, siendo relatora la segunda Magistrada mencionada.

Firman el Magistrado y las Magistradas, integrantes de este Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ante la Secretaria de Tribunal, quien da fe.

(Firmado electrónicamente)

MAGISTRADA PRESIDENTA

MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO

(Firmado electrónicamente)

MAGISTRADA RELATORA

ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS

(Firmado electrónicamente)

MAGISTRADO

MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA

(Firmado electrónicamente)

SECRETARIA DE TRIBUNAL

NORMA ANGÉLICA BENAVIDES VARELA

La Secretaria de Tribunal Certifica: Que esta hoja pertenece a la sentencia pronunciada el **dieciocho de febrero de dos mil veintiuno**, en sesión ordinaria virtual, en el expediente **DA.- 207/2020**, cuyo punto resolutivo es el siguiente: **“ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***** ***** ***** ** *******

***** en contra de la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte, emitida por la Magistrada instructora de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad en vía sumaria *****

***** Doy fe.

(Firmado electrónicamente)
SECRETARIA DE TRIBUNAL
NORMA ANGÉLICA BENAVIDES VARELA

La Secretaria de Tribunal del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, **Norma Angélica Benavides Varela**, hace constar que el presente fallo se firmó electrónicamente por los integrantes de este Tribunal y se terminó de engrosar en fecha _____ . Conste.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

7222156_0067000026920515007.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 4

FIRMANTE					
Nombre:	NORMA ANGELICA BENAVIDES VARELA		Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA					
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.01.33.d2		Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	01/03/21 23:30:53 - 01/03/21 17:30:53		Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256				
Cadena de firma:	11 eb 88 9f c6 54 72 63 db a8 96 6a 9c 34 f6 20 08 5c 5b a0 38 5a 09 c5 f3 be 4c 1f 50 f7 56 fc ba dd 5e 20 4e c5 33 48 42 cc bc a4 ce a3 13 46 c5 62 2e 3b e5 2e ce f0 cd 38 7f f0 51 65 2d 89 1f aa 8f 8d 67 f8 61 97 72 f6 59 1e f9 ec c3 e5 d8 cd 36 2d 3e 33 cc 76 33 a2 00 7a d4 32 c9 6c 8c 28 6e a9 79 b4 5e fd 7c 2c 1e ca b4 65 e5 b0 81 59 5c ca af 77 f6 2d e9 21 69 58 68 48 b5 8f a7 0a 39 ad bb 60 87 51 14 e0 7f 6a d8 1f 46 6a da f0 b3 7a b0 ef 1a 43 60 37 6c 07 9c 1d 93 f9 69 e7 52 78 f3 f7 7f f5 5a 71 8a 0d a7 ec e1 7e ad be 52 4b 01 57 6d 6c 3e 47 02 7c c5 59 4f 23 e5 08 79 7b 2e 99 cf d3 d7 8d be 68 6a 19 7f c3 b4 b5 66 93 57 db ae 81 c3 f7 91 fa bd 9c 43 9d f2 43 60 f5 b0 f3 ae 29 4b 2f a6 6f 6b 34 85 aa 88 ba 15 2e 01 32 10 48 b5 04 f9 ef d6 b2 a7 bb				
OCSP					
Fecha: (UTC / CDMX)	01/03/21 23:30:54 - 01/03/21 17:30:54				
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02				
TSP					
Fecha : (UTC / CDMX)	01/03/21 23:30:54 - 01/03/21 17:30:54				
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Identificador de la respuesta TSP:	39135075				
Datos estampillados:	+6EDwdKM5ld3SIKQreUeYVTou98=				



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.03.03	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	03/03/21 16:39:34 - 03/03/21 10:39:34	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	6b ad b8 87 e9 08 8e f8 b0 89 5a cf b8 0d 64 e9 dc d1 4c 10 b8 ab 98 3a bb ef f1 6b 9c 86 33 dd 05 96 d2 63 82 cd fa b5 14 c1 8c 2c 15 81 50 6a 7e 34 d6 cc e3 56 f1 7a 14 91 12 d1 29 24 3d 8c dd 0d da c7 4b c7 98 e5 c2 5b 38 95 3b b8 d8 14 9c d5 dc 66 a2 8f c0 cc 7a 2e a9 5a 50 5d f7 6a 95 49 25 3f 44 da ba 63 05 85 9f 45 d1 9c 8b b7 85 19 29 b5 44 3d 07 75 69 7e b1 66 b5 3c 3b 4b ea 49 47 3d 38 f5 4b 1f ef a1 90 57 08 6f 0e d7 ff 7f 91 04 0e 21 ca f4 32 05 5b cc ee ed 0d 39 02 e3 b3 ab 8b 34 fa f5 63 23 ad aa 37 c6 60 c3 d9 3a 83 71 a4 d3 ff 68 d8 50 12 eb e0 10 d7 7c 6c 04 12 e6 0e c8 f7 e1 9f de 98 98 7e 65 21 20 a2 d0 df 3d 9f 5a 07 96 c9 d2 5c cb 39 ee eb e5 c8 b5 94 22 f6 b7 44 6e 18 b7 e4 72 5a af 41 11 17 2f d1 df 33 34 d9 3c 6f 39 04 0b 1e 6b 88 bd			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	03/03/21 16:39:34 - 03/03/21 10:39:34			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	03/03/21 16:39:35 - 03/03/21 10:39:35			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	39464990			
Datos estampillados:	NWzaZ1EaJ7ky0I928vxqt0Qaluk=			



FIRMANTE				
Nombre:	MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a4.64	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC / CDMX)	03/03/21 17:43:41 - 03/03/21 11:43:41	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	0b a3 09 b7 a1 a2 0f f4 18 27 43 3a 84 0f c8 9f da f5 67 db 91 9d f3 17 68 30 85 f7 1b 4f 53 3f 0c d7 f1 87 82 3b 42 06 3b fe b5 c7 8b 61 7c be 79 64 d4 f5 30 aa 7a 79 99 14 b5 c1 42 30 f6 a2 51 ef bb 41 3e f5 de 06 0c 6a af b0 04 97 cc c2 b8 44 1a 54 db 37 90 c9 37 b7 4b 67 6a c3 ee 8d 95 dd 81 3f 84 a5 97 9f 1b 7d bc f2 6b ee 99 0c d3 bf 7a 0d eb b7 75 f6 db db c2 19 23 d9 00 3e 7f b6 75 6f a2 29 e5 df b8 ef 3f 5f 09 c5 bd 26 44 61 d6 8e 79 10 ac 04 28 2e 76 3a c6 13 0a 9a 20 d5 29 80 36 06 e8 70 ca 98 af 60 9a a3 05 b7 e5 0d 7d 33 ef 0f 1f 46 58 76 1c c3 25 b9 a6 3d e2 cf 2e 07 d8 6a 7e a5 03 18 a7 b3 75 b7 9d a9 8f 12 36 ee 74 c6 03 19 d5 f7 94 bc a3 41 e3 f8 e0 2e 50 f3 16 38 e9 e2 7e da a7 1f 2e a2 fe e9 ba a8 fa bc 5c 01 a6 17 56 65 91 07 ec 58 31 55			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	03/03/21 17:43:41 - 03/03/21 11:43:41			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	03/03/21 17:43:41 - 03/03/21 11:43:41			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	39480571			
Datos estampillados:	d08z6/n/cx3//36s5DTctRNo6h0=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	Marco Antonio Cepeda Anaya	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a5.50	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	03/03/21 19:36:21 - 03/03/21 13:36:21	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	1f bf 20 b7 ca 26 c8 eb 7c c4 44 1d 51 df f0 88 7b c7 9c 32 f4 0f ac bf 53 e5 87 26 b6 f5 20 cd d2 7f 59 76 26 6f 94 03 c7 fc 78 b8 65 f1 66 52 b9 d6 24 f9 d7 d6 cd a4 d3 0c 88 60 59 85 2a 87 fa 07 d0 52 be 2d 12 a9 01 9a 1c de 4c ab 43 3e 14 57 67 8b b8 77 ce 7c b9 e6 7d 0c 38 d8 5b 39 b1 9c dd 3b d8 6e 19 11 2c ae 6b 6b 49 ef d5 0c fd bf a2 33 32 6f 10 6d d4 72 0b af 13 3e c2 d0 85 db 61 d5 c8 83 e3 cb 1e ae 84 ff ac 3f 40 34 ca 93 dd f7 54 25 c6 c5 29 53 5e 2f 8e 80 94 c2 c2 67 6e 5a 4d 0f 39 4b 07 22 b4 d0 59 0e 40 02 e5 83 36 c1 fa 6f 74 52 8b 77 00 8d 70 43 e3 15 b3 81 64 cd ee 48 1a 1e d3 fa 78 ad fc cf d9 3c 69 91 bf 9d a0 69 16 b7 bc 4d a1 f4 3d ea 8b b8 4d 2b 18 e4 4c 41 75 78 c3 d0 fa 5b a6 a3 04 50 22 f2 0e 02 69 c4 38 f1 53 c2 0b 5d fb ba c2 71			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	03/03/21 19:36:22 - 03/03/21 13:36:22			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	03/03/21 19:36:22 - 03/03/21 13:36:22			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	39510558			
Datos estampillados:	QYrE/1SwGur0V3H9PUSdg4QI7dU=			

El licenciado(a) Norma Angélica Benavides Varela, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.